



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda
Acción Popular No.: 11001-33-35-010-2020-00310-00

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001-33-35-010-2020-00310-00

DEMANDANTES: CORPORACIÓN TRABAJANDO UNIDOS POR BOGOTÁ –

Representante Legal Bernardo Vladymir Torres Garzón

BENITO PÉREZ BUITRAGO

HUMBERTO RIVERA SÁNCHEZ

MARGARITA SALAMANCA SANDOVAL

LISSET AGUIAR CRUZ

GABRIEL MARÍA LÓPEZ CUADRADO

JORGE LUIS GARCÍA Menco

VÍCTOR JULIO PACHÓN PACHÓN

FLOR PATRICIA PEDREROS NOVOA

DEMANDADOS:

BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE BOGOTÁ E.S.P.**

YAMEL HUSEIN DALEL SUAIN

ARIA INÉS REYES CARVAJAL

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA
CIVIL - AEROCIVIL**

CLASE:

ACCIÓN POPULAR

La **CORPORACIÓN TRABAJANDO UNIDOS POR BOGOTÁ**, con NIT 830.071.728-8, **BENITO PÉREZ BUITRAGO**, con cédula de ciudadanía 79.860.906, **HUMBERTO RIVERA SÁNCHEZ**, con cédula de ciudadanía 4.158.048, **MARGARITA SALAMANCA SANDOVAL**, con cédula de ciudadanía 51.707.030, **LISSET AGUIAR CRUZ**, con cédula de ciudadanía 52.916.536, **GABRIEL MARÍA LÓPEZ CUADRADO**, con cédula de ciudadanía 79.358.098, **JORGE LUIS GARCÍA Menco**, con cédula de ciudadanía 1.002.489.191, **VÍCTOR JULIO PACHÓN PACHÓN**, con cédula de ciudadanía 17.735.102, y **FLOR PATRICIA PEDREROS NOVOA**, con cédula de ciudadanía 20.381.295, en nombre propio, presentan Acción Popular en contra de **BOGOTÁ, D.C., ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL, EMPRESA DE**



ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P., YAMEL HUSEIN DALEL SUAIN, ARIA INÉS REYES CARVAJAL, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, por considerar que estas autoridades y las personas naturales mencionadas, están vulnerando los derechos colectivos a (i) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias, (ii) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración, o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, (iii) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, y la (iv) La seguridad y salubridad públicas.

Examinada la demanda y la subsanación efectuada a la misma, se observa que reúne los requisitos formales y los presupuestos procesales para su trámite, conforme con los artículos 18 de la Ley 472 de 1998 y 144 de la Ley 1437 de 2011, por lo cual será del caso disponer su admisión.

DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA

Solicitan los actores populares en la demanda que (i) se ordene cancelar toda licencia de construcción en trámite o ya aprobada que exista sobre el lote ubicado en la Carrera 122 A Bis No. 69 – 21, y (ii) “se le de viabilidad política, técnica, financiera, generadora de empleo y ejecutoriable a la construcción por parte del IDU a la Avenida José Celestino Mutis desde la carrera 112 hasta la carrera 125 conlindante a la malla del Aeropuerto El Dorado”.

En materia de medidas cautelares nuestra máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo ha definido con suma claridad sus fines y características para la procedencia de su práctica, concretando, entre otras cosas, que la medida cautelar nunca puede adelantar íntegramente el contenido de la sentencia condenatoria, pues provocaría la desnaturalización de su esencia, que es precisamente servir de medida condicional mientras se define el fondo de la controversia. Además, por



aplicación del principio de la proporcionalidad, debe ejecutarse con el mínimo de sacrificio de los derechos del demandado y, en el evento de presentarse varias opciones, adoptar la que resulte menos gravosa para sus intereses.

Al respecto cabe traer a colación el aparte de la providencia aludida, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la doctora María Elena Giraldo Gómez, de fecha 5 de agosto de 2004, que señala:

“C. Medidas cautelares en los procesos de acciones populares:

*Desde la generalidad, las medidas cautelares se definen por su finalidad aseguradora de una futura ejecución forzada, de manera que se derivan las siguientes consecuencias: a) el proceso cautelar no es independiente, ni respecto del proceso de declaración, ni del de ejecución; b) la medida cautelar nunca pueda adelantar íntegramente el contenido de la condena, y, simultáneamente, c) las medidas cautelares serán homogéneas pero nunca idénticas a la medida ejecutiva de que se trate. Pero además las medidas cautelares pueden ser de “**justicia o tutela cautelar**”, que son un género añadido al de la tutela declarativa y ejecutiva.”¹*

La doctrina en cita agrega que la instrumentalidad, la idoneidad, la proporcionalidad y la variabilidad, son aspectos que definen el núcleo esencial de las medidas cautelares, que las diferencian de otras instituciones: La instrumentalidad alude a que las medidas cautelares existen por estar pendiente un proceso y dejan de tener razón de ser cuando éste finaliza; la idoneidad versa sobre la adecuación de la medida a la situación jurídica cautelable, es decir que la medida ha de corresponderse con el objeto del proceso incoado o que se incoará; la proporcionalidad corresponde al mínimo sacrificio de los derechos del demandado, y por lo mismo, si son varias las medidas que se pueden acordar, debe adoptarse la menos perjudicial, e incluso, si las circunstancias varían, deberá modificarse por una menos gravosa; y la variabilidad atañe con el carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y alzamiento.”²

En tales condiciones, encuentra el Juzgado que la petición relacionada con las dos medidas solicitadas, no se ajustan a los requisitos que deben reunir las medidas cautelares, pues, en primer término, se estaría adelantando íntegramente el contenido de la condena si el fallo fuere favorable a la parte accionante y, en segundo lugar, resultaría injustamente gravosa para las partes demandadas, en el evento de resultar absueltas de los cargos que se endilgan.

Por lo anterior, esta instancia judicial se abstendrá de decretar la medida cautelar solicitada por los actores populares.

¹ Teresa Armenta Deu, Lecciones de Derecho Procesal Civil, Marcial Pons, Madrid, 2002, pg. 512.

² Acción Popular. Héctor Tercero Merlano Garrido.



DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA

La parte demandante allegó escrito el 18 de diciembre del presente año, adicionando la demanda, solicitando se ordene a la Secretaría Distrital de Movilidad para que organice la movilidad vehicular de la UPZ 74, y se coloque la movilidad de manera unidireccional por la Calle 64 en sentido occidente oriente, desde la carrera 113 C hasta la transversal 112 B Bis punto llamado El Radar. Igualmente, que la mencionada Secretaría organice las vías, es decir, que se evalúe el uso de la Calle 63 i a espaldas del Centro Comercial TUYO, y otras, en coordinación con la Corporación Trabajando Unidos por Bogotá y la comunidad; y se le ordene a las empresas con asentamiento en Engativá, a que sus pedidos y remesas a partir de la fecha, se realicen en vehículos de carga máximo de 4 toneladas.

*Para resolver, se tiene que el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, dispone que: “(...) **Antes de presentar la demanda** para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez (...).”, lo que denota la posibilidad que tiene cualquier persona, de invocar la protección de derechos o intereses colectivos, de manera previa y sin tener que acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.*

*Adicionalmente, el Consejo de Estado³, ha sido enfático en señalar que el requerimiento a la autoridad administrativa para que adopte las medidas necesarias para la protección del derecho colectivo debe efectuarse **con anterioridad a la presentación de la demanda** y que incluso se le debe otorgar un término de 15 días a la administración para que dé respuesta; la importancia de esta finalidad, es para que sea la administración el primer escenario donde se solicite la protección del derecho colectivo, en aras de que si es posible, cese de manera inmediata la vulneración de tales derechos.*

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente María Elizabeth García González, sentencia del 13 de julio de 2017, Radicado No. 25000-23-41-000-2016-02092-01.



En ese orden de ideas, esta instancia judicial negará la adición a la demanda presentada por la parte demandante, ante la carencia de tal requisito, del cual ya tiene pleno conocimiento el actor popular, desde cuando se inadmitió la demanda por auto del pasado 9 de noviembre por la misma causal, de manera que no es viable nuevamente su inadmisión. Lo anterior conlleva a que tampoco se efectúe pronunciamiento en relación con la medida cautelar en ella solicitada.

En consecuencia, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

DISPONE

PRIMERO.- ADMITIR, con conocimiento en PRIMERA INSTANCIA, la presente Acción Popular instaurada por la **CORPORACIÓN TRABAJANDO UNIDOS POR BOGOTÁ**, con NIT 830.071.728-8, **BENITO PÉREZ BUITRAGO**, con cédula de ciudadanía 79.860.906, **HUMBERTO RIVERA SÁNCHEZ**, con cédula de ciudadanía 4.158.048, **MARGARITA SALAMANCA SANDOVAL**, con cédula de ciudadanía 51.707.030, **LISSET AGUIAR CRUZ**, con cédula de ciudadanía 52.916.536, **GABRIEL MARÍA LÓPEZ CUADRADO**, con cédula de ciudadanía 79.358.098, **JORGE LUIS GARCÍA MENCO**, con cédula de ciudadanía 1.002.489.191, **VÍCTOR JULIO PACHÓN PACHÓN**, con cédula de ciudadanía 17.735.102, y **FLOR PATRICIA PEDREROS NOVOA**, con cédula de ciudadanía 20.381.295, en nombre propio, presentan Acción Popular en contra de **BOGOTÁ, D.C., ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL, EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P., YAMEL HUSEIN DALEL SUAIN, ARIA INÉS REYES CARVAJAL, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, por su presunta vulneración a los derechos colectivos a (i) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias, (ii) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración, o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y



restauración del medio ambiente, (iii) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, y la (iv) La seguridad y salubridad públicas.

SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente a los Representantes Legales de **BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, la ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ, la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P., el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL,** a los señores **YAMEL HUSEIN DALEL SUAIN y ARIA INÉS REYES CARVAJAL,** y/o a quien se le haya delegado dicha función, el contenido de la presente providencia y entréguese copia de la demanda y sus anexos, y de la subsanación a la misma, en la forma prevista por el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011.

TERCERO.- NOTIFICAR personalmente al Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho y a la Defensoría del Pueblo para que, si lo consideran conveniente intervengan en defensa de los derechos e intereses colectivos deprecados.

CUARTO.- DENEGAR la medida cautelar solicitada por los actores populares en la demanda, por lo expuesto en la motivación anterior.

QUINTO.- DENEGAR la adición de la demanda presentada por el actor popular, por los motivos señalados en la parte considerativa del presente auto.

SEXTO.- La parte demandante hará conocer a la comunidad dentro de los cinco (5) días siguientes de la notificación de este auto, la existencia de esta demanda mediante aviso de prensa en un periódico de amplia circulación nacional y en forma destacada, para el propósito de los artículos 21 y 24 de la Ley 472 de 1998, de la cual deberá allegar copia de la publicación, en la cual se debe enunciar lo siguiente:

“Que en el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Segunda, Expediente No. 11001-33-35-010-2020-00310-00, se adelanta acción popular contra **BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ, SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P., YAMEL HUSEIN DALEL SUAIN, ARIA INÉS REYES CARVAJAL, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO,**



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Acción Popular No.: 11001-33-35-010-2020-00310-00

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL; con el objeto de que se amparen los derechos colectivos a (i) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias, (ii) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración, o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, (iii) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, y la (iv) La seguridad y salubridad públicas; señalando como fundamentos fácticos sobresalientes, los siguientes:

1.- Desde el año 2000 la comunidad de Engativá ha visto como el Humedal Jaboque se ha venido deteriorando; si bien se han realizado obras como canales perimetrales, diques y ciclorutas, las mismas dieron como resultado el desplazamiento de poblaciones de animales endémicos y nativos, es decir, especies que solo se pueden encontrar en este relicto ecológico y que no están registrados en ninguna otra parte del mundo, sino que son propios del ecosistema del humedal.

2.- Los propietarios del inmueble ubicado en la Carrera 122 A BIS No. 69 – 21, autorizan o presuntamente arriendan el globo de su terreno para el estacionamiento de todo tipo de vehículos, dicho parqueadero fue relleno con escombros, aumentando la altura del nivel del piso con miras a evitar su encharcamiento y perjudicando los predios del barrio El Cedro, cuyas calles se inundan cada que cae una fuerte lluvia. Se presentan problemas para el libre tránsito peatonal y vehicular en el sector. El servicio se presta sin cumplir con el mínimo de normas que brinden seguridad a los usuarios y vecinos, toda vez que se apoya en las paredes de las casas de los vecinos, no hay demarcación, no existe un desagüe de aguas lluvias, no está pavimentado, no tiene baños, por lo que los usuarios hacen sus necesidades contra las casas de los afectados.

3.- La administración distrital y el plan Portas del aeropuerto han venido trazando planes de ampliación del Aeropuerto El Dorado, sin informar con claridad las pretensiones a la comunidad, lo que impide tener conocimiento de la afectación que a futuro puedan tener los inmuebles de propiedad de los vecinos de Engativá.

4.- El barrio El Cedro fue encerrado con malla eslabonada en el costado occidental o carrera 123 B desde el año 2014, y de llegar a realizarse un simulacro de evacuación, la comunidad no tendría un punto de encuentro, y mucho menos se cuenta ahora con un paraje libre de caída de objetos.

PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

1.- ORDENAR a BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, como autoridad de policía, para que restituya el espacio público de las carreras 123, 123 A y 123 B, que hacen parte del barrio El Cedro y lo conectan con el barrio Santa Librada, el cual se encuentra obstaculizado con barrera de latas de zinc e invadido por un parqueadero.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Acción Popular No.: 11001-33-35-010-2020-00310-00

2.- Agendar junto con la comunidad un recorrido, para que el Despacho constate el deterioro en que se encuentran algunos sectores del Humedal Jaboque que son usados como botadero de basura, presentándose olores y plagas que afectan la salubridad pública, “para que de manera programática la comunidad y la alcaldía generen acciones que retribuyan financieramente el accionar de la comunidad con labores de control, mitigación, manejo, control y recuperación de los valores y funciones del humedal Jaboque, en especial a través de la Junta de Acción Comunal del barrio El Cedro y la Corporación Trabajando Unidos por Bogotá”.

3.- Se ordene a la administración distrital recuperar el lote ubicado en la carrera 122 A BIS No. 69 – 21, para que la UPZ 74 lo aproveche como parque de recreación, construcción de una sede del SENA o de la Universidad Distrital, u otro proyecto de interés comunitario.

4.- Se ordene cancelar toda licencia de construcción en trámite o que se encuentre aprobada por la Secretaría Distrital de Planeación, respecto del lote de terreno ubicado en la Carrera 122 A BIS No. 69 – 21.

5.- Se ordene a la administración distrital, Alcaldía Local, Secretaría Distrital de Ambiente, empresa Aguas de Bogotá y Secretaría Distrital de Educación, para que abran espacios de participación contractual, trabajos como recuperación física del Humedal Jaboque, capacitación a estudiantes de colegios y uso de espacios privados para la instalación de observatorios de aves y bibliotecas, igualmente, dar uso comunitario y ecológico al inmueble con dirección Carrera 123 B No. 69 – 49, como sede de estas actividades.

6.- Se le ordene a las partes demandadas que incluyan dentro de sus programas de financiación, el uso e implementación de la Casa Ecológica, Cultural y de la Juventud del Humedal Jaboque, con sede en la Carrera 123 B No. 69 – 49, cuya administración se generaría con la Corporación Trabajando Unidos por Bogotá y la Junta de Acción Comunal del barrio El Cedro, y se puedan desarrollar actividades como la investigación, observación de aves, lectura, y desarrollo de la juventud de Engativá en los tiempos libres.

7.- Se le ordene a la Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldía Local y Aeronáutica, para que aclaren en audiencia pública y en coordinación con la Corporación Trabajando Unidos por Bogotá, socialicen permanentemente y por barrios de la UPZ 74, las intenciones en que se viene trabajando en planes y proyectos, evitando que se sesione a puerta cerrada, sin contar con la comunidad, y así evitar sorpresas negativas para los habitantes, con el despojo por desvalorización de predios en la UPZ 74.

8.- Se le ordene a la administración distrital y al Instituto de Desarrollo Urbano, para que terminen de comprar los terrenos faltantes para conectar la Avenida José Celestino Mutis con la Carrera 113 D, en los cuales se involucran los que pertenecen a la AEROCIVIL.

9.- Se le de viabilidad política, técnica, financiera, generadora de empleo y ejecutoriable a la construcción por parte del Instituto de Desarrollo Urbano a la Avenida José Celestino Mutis desde la Carrera 112 hasta la Carrera 125 colindante a la malla del Aeropuerto El Dorado.



SÉPTIMO.- De conformidad con el artículo 22 de la Ley 472 de 1998, una vez notificadas las autoridades accionadas y las personas naturales mencionadas, comenzará a correr el traslado por el término de diez (10) días, para que contesten la demanda y soliciten las pruebas que pretendan hacer valer. Entérese a las entidades demandadas y personas naturales que se proferirá la correspondiente decisión dentro de los veinte (20) días siguientes al vencimiento del traslado para alegar, de conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998.

OCTAVO.- Atendiendo al deber que impone el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, para efectos de la conformación del Registro Público Centralizado de Acciones Populares y de Grupo, envíese copia de la demanda, de la subsanación a la misma, así como del auto admisorio, a la Defensoría del Pueblo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


JAVIER LEONARDO ORJUELA ECHANDÍA
Juez

(E)

mqc